



Desactivar las bombas

El expresidente Iván Duque retrató la grave coyuntura heredada del cuatrienio de Gustavo Petro con una metáfora: “Cinco bombas de tiempo”, la seguridad, la fiscal, la energética, la salud y la política exterior. Sería insensato exigir su desactivación en apenas dos meses. Pero ya es posible examinar cómo el nuevo gobierno intenta cortar las mechas, una a una, antes de que el daño sea irreparable.

El presidente Abelardo De La Espriella asumió con firmeza su condición constitucional de comandante supremo de la Fuerza Pública. Sus primeras victorias frente al crimen organizado empiezan a devolver confianza a una nación golpeada por el deterioro del orden público, la expansión criminal y la pérdida del control territorial.

Su estilo ha despertado críticas, pero la autoridad no se proclama: se demuestra con resultados. Y si el Congreso aprueba la ‘ley de sometimiento’ y el ‘estatuto antiterrorista’, junto con la reforma del protocolo de actuación de la Fuerza Pública frente a la protesta social, iniciativas lideradas por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el Estado contará con nuevos instrumentos para enfrentar esa amenaza. Ninguna bomba de tal magnitud se desactiva de la noche a la mañana.

La segunda, la fiscal, tiene un mecanismo más complejo. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el trámite de la ‘ley de rescate fiscal’ y las directrices de austeridad y un manejo pulcro de los recursos públicos buscan corregir las consecuencias nefastas del despilfarro y la corrupción del gobierno anterior.

Al frente están la experiencia del vicepresidente José Manuel Restrepo y el buen criterio del ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Pero no bastará con sustituir la costosa deuda del ‘gota a gota’ heredada por financiación sostenible: será indispensable reducir el gasto en más del 1,5 % del PIB, empezando por la burocracia. El reloj fiscal solo se detendrá con decisiones de fondo.

La bomba fiscal está ligada a la energética. Las decisiones ideológicas que fre-

naron la exploración de hidrocarburos, el deterioro de la capacidad técnica del sector y el saqueo de Ecopetrol comprometieron la autosuficiencia energética. A ello se sumó una transición lenta. El nuevo gobierno busca corregir el rumbo: restablecer la confiabilidad del sistema, reactivar la exploración y producción, impulsar proyectos costa afuera, evaluar yacimientos no convencionales y recuperar a Ecopetrol.

También propone reabrir el debate sobre el *fracking* con criterios ambientales. Será un proceso difícil, pero aplazarlo agravaría el daño.

La política exterior muestra avances más rápidos. Se recuperaron las relaciones con Estados Unidos, principal aliado de Colombia, y se restablecieron los vínculos con los países vecinos e Israel. El presidente De La Espriella ha trazado una ruta clara, bien ejecutada por el vicepresidente Restrepo. Aún falta reconstruir la capacidad técnica de la Cancillería y traducir la diplomacia en acuerdos bilaterales de beneficios tangibles. Tender puentes fue el comienzo; ahora corresponde darles contenido.

Su estilo, el del Presidente, ha despertado críticas, pero la autoridad no se proclama: se demuestra con resultados.

Queda la bomba de la salud, sin duda la más grave por sus consecuencias sociales. La ministra Ana María Vesga anunció un plan de choque de \$ 500.000 millones, a través de la Adres. Un comienzo necesario pero distante de los \$ 10 billones que el Presidente prometió inyectar al sistema en sus primeros 90 días. Restan menos de 30 días:

El propósito era sacarlo de cuidados intensivos, restablecer el flujo de recursos a hospitales y proveedores y garantizar atención y medicamentos oportunos. Mientras el dinero no llegue, la emergencia continuará. Esta bomba sigue activa, y su cuenta regresiva no admite excusas ni demoras.